

Testimonio

En peligro la vida de Yuri Quintero, lideresa campesina, feminista y católica colombiana

Cristiano Morsolin
22/09/2024
Religión Digital

La nueva edición de la revista “Noche y Niebla” N° 69 revela una alarmante escalada de violencia en Colombia durante el primer semestre de 2024. Según los datos del centro jesuita de educación popular Cinep, se documentaron 536 casos de violaciones a los Derechos Humanos, al Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario (DIHC) y a la violencia político-social (VPS), lo que representa un incremento significativo en comparación con periodos anteriores.

De los 536 casos, 205 corresponden a homicidios, siendo los liderazgos sociales y las comunidades indígenas los principales objetivos: 60 líderes y lideresas sociales fueron asesinados, 26 de ellos pertenecientes a comunidades indígenas, junto a 17 campesinos y un miembro de la comunidad LGBTIQ+. Además, 156 líderes sociales y 26 personas indígenas recibieron amenazas. Los paramilitares encabezan la lista de perpetradores con 56 asesinatos, seguidos por las guerrillas con 22. También se registraron cuatro ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por la Policía. En cuanto a las amenazas, los paramilitares fueron responsables de 112 casos y las guerrillas de 49. La tortura y la desaparición forzada continúan siendo prácticas recurrentes.

Putumayo, Cauca, Antioquia y La Guajira concentraron la mayor cantidad de homicidios, mientras

que Casanare y Santander fueron los departamentos más afectados por amenazas. Esta situación empeora por la presencia de grupos armados ilegales que disputan el control territorial, la explotación de recursos naturales y el narcotráfico.

El dramático relato de la lideresa Yuri Quintero sobre la guerra en Putumayo (Amazonia)

Fue en abril de 2020 cuando Yuri Quintero, coordinadora de la Red de campesinas y defensoras de Derechos Humanos del Putumayo, colaboradora de Cinep y anteriormente diputada de izquierda del departamento-región de Putumayo y los pueblos amazónicos recibió en su celular, graves amenazas de muerte: “*Dígale a YURI (Quintero) y a YULE (Anzueta) que por acá (San Miguel, Putumayo) hay la orden de ‘tumbarlos’ (asesinarlos) a los dos*”, sería uno de los mensajes intimidantes.

Conversamos con Yuri Quintero el pasado 11 de septiembre de 2024 en la sede del Cinep de Bogotá: “*es impresionante el coraje de esta lideresa feminista y católica, que no tiene miedo a enfrentar las petroleras que destruyen la casa común de la amazonia colombiana, que no tiene miedo a enfrentar los grupos armados ilegales*”.

Yuri Quintero, hizo un llamado a los poderosos patrones de la guerra, subrayando que:

“Nuestro principal llamado es el respeto a la vida de la comunidad y la exclusión de la comunidad civil del conflicto armado. Hay un patrón sistemático de violencia política y especialmente hacia movimientos de izquierda, movimientos de DD.HH, sociales y sindicales. Los líderes reclamantes de derechos son los más victimizados.

Nosotros insistimos en que no hay garantías porque los casos incrementan. No hay un avance en una ruta definitiva para que no se siga repitiendo los asesinatos de líderes sociales en Putumayo”, concluyó Yuri Quintero.

¿Por qué Yuri Quintero, como Andrea Alvis Lora, como tantas, necesitan del acompañamiento internacional para proteger sus vidas frente a la persecución que sufren como defensoras de derechos humanos en el Putumayo?



Yuri Quintero ha explicado el contexto estratégico de la Amazonia, evidenciando que la región de Putumayo conocida por su riqueza en recursos naturales, ha sido durante mucho tiempo un foco de proyectos petroleros y mineros tanto legales como ilegales. Estos proyectos han exacerbado la violencia, ya que los grupos armados buscan controlar y beneficiarse de estas actividades extractivas y la deforestación ha aumentado significativamente en Putumayo. Este deterioro ambiental, sumado a la violencia, agrava aún más la situación social en la región. Putumayo tiene un 79% de su superficie cubierta de bosques y un 19% son áreas protegidas, sin embargo, es el cuarto departamento con mayor tasa de deforestación.

Contrario a lo esperado tras los Acuerdos de Paz de 2016 y la instauración de la política de Paz Total, que derivó en el inicio de diálogos con los actores armados presentes en el departamento, Putumayo no ha visto avances significativos hacia la superación del conflicto armado. Entre 2018 y 2024, el departamento ha sido testigo de una serie de transformaciones y profundizaciones en el conflicto armado, impulsadas por la aparición y consolidación de nuevos grupos armados. Estos grupos han surgido como resultado de una fusión compleja entre antiguos narcotraficantes, paramilitares y disidentes de los Acuerdos de Paz de 2016. La lucha por el control territorial, las rutas de narcotráfico, el control de la minería ilegal y demás formas de negocio ilegal que son fuente de financiación de los grupos armados en la región, ha derivado en un escenario de violencia continua

y represión que afecta gravemente a la población civil.

Yuri Quintero recuerda el inicio de su lucha militante en defensa de los campesinos del Putumayo, desde las marchas cocaleras de 1998, fotografiando la dramática realidad rural y destacando que “en las áreas rurales, se imponen severas restricciones a las Juntas de Acción Comunal (JAC) y otras formas de organización comunitaria. Se han establecido toques de queda, reuniones obligatorias y censos cocaleros, donde se determinan tiempos y costos asociados a la producción de coca, perpetuando así una economía ilícita que el Estado colombiano no ha logrado dismantelar estructuralmente.

Es de resaltar que una característica de los actores armados que hacen presencia en Putumayo tiene que ver con su ubicación coincidente con puntos de concentración del monocultivo de hoja de coca, que para 2022 se había más que duplicado con relación al año 2021. Según el informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), “en el Putumayo se presentó un incremento de estos cultivos del 70%. Mientras en 2021 había 28.205 hectáreas sembradas, en 2022 se pasó a tener 48.034 hectáreas”.

“La violencia en Putumayo se manifiesta de diversas formas, clasificándose como violencia social, económica y política. Esto incluye asesinatos sistemáticos con métodos de sevicia en zonas urbanas contra jóvenes, mujeres, directivos comunales, población indígena y campesina; masacres, desplazamientos masivos y gota a gota, desaparición de personas en zonas rurales cuyos cuerpos luego aparecen en alto estado de descomposición, amenazas constantes y la proliferación de panfletos que incrementan la zozobra en el territorio”, concluyó la lideresa Yuri Quintero.

Ante este exterminio se alzan distintas voces como la del jesuita Javier Giraldo, defensor de derechos humanos, conocido a nivel internacional por su liderazgo en el Tribunal Permanente de los Pueblos, fundador del centro jesuita de educación popular Cinep y acompañante de la Comunidad de paz de San José de Apartado el pasado el 11 de septiembre de 2024 denunciaba: “A dos años de gobierno del Pacto Histórico en Colombia,



mientras las propuestas de “Paz Total” revelan sus máximas complejidades y el gobierno es cada vez más consciente de que no es lo mismo acceder al gobierno que acceder al poder, el cual se le presenta cada vez más esquivo, el exterminio del liderazgo social de base sigue su ritmo implacable”.

Para explicar esta grave afirmación, el p. Javier Giraldo ha enfatizado:

“no hay duda que el incentivo fundamental de ese genocidio continuado de los sectores de base es la impunidad. Se van multiplicando las voces que reclaman una reforma urgente de la justicia, entre ellas la del mismo Presidente Petro, pero a medida que los expertos se introducen en el laberinto de lo judicial van apareciendo las garras de un monstruo arraigado en dinámicas intransigentes de variadas formas de corrupción.

El Presidente Petro ha señalado algunos de los mecanismos tramposos, como por ejemplo la fragmentación de los procesos para distribuir su tratamiento en diversas instituciones procesales que dilatan, se contradicen y terminan sepultando

las acciones de justicia; también ha demostrado que las “reformas” a la justicia se han centrado en cómo el poder político se apodera de cada vez más espacios del poder judicial, todo inspirado en una justicia-venganza, sesgada y parcial, que a la postre se convierte en arma de las élites en el poder para aplastar a sus opositores”, concluyó el jesuita Giraldo.

Las problemáticas contenidas en este artículo serán presentadas en el foro del próximo 26 de septiembre de 2024 en la “Precop16-Paz con la naturaleza”, directamente a la ministra de medioambiente Susana Muhamad y al relator de la ONU, Michel Forst.

“La comunidad internacional, junto al Papa Francisco, exige al Presidente de la República, Gustavo Petro, de proteger la vida de los/las defensores de derechos humanos como Yuri Quintero y las líderes campesinas del Putumayo.